



---

## INFORME JURÍDICO

---

### **INFORME SOBRE EL PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 312/2019, DE 26 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS**

#### **I. ANTECEDENTES**

**1.-** Con fecha 11 de junio de 2025, procedente de la Secretaría de Estado de Justicia, ha tenido entrada en el Consejo General del Poder Judicial, a efectos de la evacuación del correspondiente informe de conformidad con lo dispuesto en el artículo 561.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Centro de Estudios Jurídicos.

**2.-** En fecha 25 de junio de 2025, se ha recibido comunicación desde la Secretaría General Técnica-Secretariado del Gobierno del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, mediante la que se ha remitido nuevo texto del proyecto de Real Decreto en el que, como novedad, se da nueva redacción al artículo 6 del Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos, relativo a la composición del Consejo Rector.

**3.-** La Comisión de Estudios e Informes ha designado como ponentes del presente informe a los Vocales don Ángel Arozamena Laso y don José Antonio Montero Fernández.

#### **II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA POTESTAD DE INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

**4.-** La potestad de informe del Consejo General del Poder Judicial a que se refiere el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene por objeto los anteproyectos de leyes y disposiciones generales que afecten total o parcialmente, entre otras materias expresadas en el citado precepto legal, al *«estatuto orgánico de Jueces y Magistrados»* y *«estatuto orgánico de los Letrados de la Administración de Justicia y del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia»* (reglas 4ª y 5ª del artículo 561.1 LOPJ).

**5.-** Cabe señalar que el proyecto de Real Decreto que se ha sometido a informe tiene por objeto adecuar *«el Estatuto del Organismo Autónomo*



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Gabinete Técnico

Estudios e informes

*Centro de Estudios Jurídicos, aprobado por el Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, para incorporar de forma expresa la función que ya viene desempeñando desde el año 2022, por medio de la convocatoria, gestión y concesión de ayudas a la preparación de oposiciones, incluyéndose también la posibilidad de hacerlo con becas mixtas, que incluyan tanto una dotación dineraria como una prestación en especie consistente en un servicio de preparación de estas pruebas de acceso.*

*Además, se regula expresamente como un objetivo y función, englobado dentro de la función genérica de impartir formación a los profesionales del Derecho, la creación de un programa de apoyo y formación para preparar las pruebas de acceso a los distintos cuerpos y carreras dentro del ámbito de competencia del CEJ.*

*Igualmente, el proyecto de real decreto persigue la adaptación del estatuto al régimen previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto a denominaciones, principios de actuación, de personal, de contratación, económico-financiero y de control de eficacia.*

*Este propósito responde al mandato previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, a fin de que todas las entidades y organismos previstos en el artículo 84.1 de la citada ley, adopten su régimen jurídico a la regulación prevista de forma general para el sector público».*

**6.-** El proyecto prevé la atribución al Centro de Estudios Jurídicos, cuya norma de cabecera se encuentra en la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 434 LOPJ), de la función de convocatoria y concesión de becas para la preparación de oposiciones a las carreras judicial y fiscal, a los cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y Abogados del Estado. Asimismo, se regula el desarrollo y ejecución de programas de formación y apoyo a la preparación de las pruebas de acceso a las carreras judicial y fiscal, a los cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y de Abogados del Estado, así como al resto de cuerpos de la Administración de Justicia. Ambos objetivos pretenden reforzar el papel del Centro de Estudios Jurídicos en el desarrollo de actividades de fomento y formación que faciliten el ingreso en la carrera judicial y otros cuerpos funcionariales vinculados con la Administración de Justicia, lo cual, sin constituir propiamente materias que se integran en el estatuto jurídico de quienes forman parte de estos cuerpos, sí que incide, aun externamente, en ese estatuto al regular la fase previa al ingreso, incorporando técnicas típicamente subvencionales (becas) y de promoción (programas de preparación).

**7.-** Además de las finalidades referidas, el proyecto pretende adaptar el estatuto del Centro de Estudios Jurídicos al régimen previsto en la Ley



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Gabinete Técnico

Estudios e informes

40/2015, de 1 de octubre, para los organismos autónomos en cuanto a denominaciones, principios de actuación, de personal, de contratación, económico-financiero y de control de eficacia.

**8.-** Sin perjuicio de lo anterior, y con arreglo al principio de colaboración entre los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial ha venido indicando la oportunidad de efectuar en sus informes otras consideraciones relativas, en particular, a cuestiones de técnica legislativa o de orden terminológico, con el fin de contribuir a mejorar la corrección de los textos normativos y, por consiguiente, a su efectiva aplicabilidad en los procesos judiciales, por cuanto son los órganos jurisdiccionales quienes, en última instancia, habrán de aplicar posteriormente las normas sometidas a informe de este Consejo, una vez aprobadas por el órgano competente.

### **III.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROYECTO**

**9.-** El proyecto consta de una parte expositiva y de una parte dispositiva estructurada en un artículo uno, una disposición derogatoria única y una disposición final única. El artículo único está a su vez conformado por ocho apartados, en los que se lleva a cabo la modificación de cinco artículos del Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos (arts. 2, 3, 10.1 y .2, 40 y 41) y se introduce un nuevo artículo 30 bis; asimismo, se introduce una disposición adicional cuarta en el Real Decreto 312/2019. En la exposición del proyecto se contiene las razones del mismo, afirmando que el organismo autónomo Centro de Estudios Jurídicos (en adelante, CEJ) tiene entre sus funciones, según se recoge en su Estatuto, aprobado por el Real Decreto 312/2019, la de desarrollar y ejecutar, en colaboración con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, las políticas de selección y formación de los funcionarios y funcionarias pertenecientes a los Cuerpos de los Letrados y Letradas de la Administración de Justicia, Médicos Forenses, Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y demás personal al servicio de la Administración de Justicia.

**10.-** Además, se pone de manifiesto que el CEJ colabora con la Fiscalía General del Estado a fin de proporcionar una preparación integral, especializada y de alta calidad a los miembros de la carrera fiscal, así como a los aspirantes a ingresar en ella.

**11.-** Y termina con la consideración de que, desde el año 2022, el Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, viene convocando ayudas para la preparación de oposiciones a las carreras judicial y fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y al



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Gabinete Técnico

Estudios e informes

Cuerpo de Abogados del Estado, como una política palanca que promueve el acceso igualitario y la remoción de obstáculos en la Administración de Justicia.

**12.-** En el artículo uno se procede a la modificación del Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Centro de Estudios Jurídicos. En concreto, se procede al cambio de denominación, de fines y principios de actuación, cuestiones relativas a las becas, del programa de formación y apoyo a la preparación de las pruebas de acceso a las carreras y cuerpos, del régimen económico-financiero y control de eficacia, así como, por último, del régimen del personal y de contratación.

**13.-** El apartado uno del artículo único añade una nueva disposición adicional cuarta al Real Decreto 312/2019, que establece el cambio de denominación del Consejo del Centro de Estudios Jurídicos, que pasa a denominarse Consejo Rector, en aras de la adaptación del Estatuto a las previsiones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

**14.-** El apartado dos modifica el artículo 2 del Estatuto del CEJ, cambiando el título del mismo, que pasa a ser «*Fines y principios de actuación*» y añadiendo a los fines y principios de actuación del CEJ la posibilidad de desarrollar y ejecutar programas de formación y apoyo a la preparación de las pruebas para el acceso a las carreras y cuerpos dentro de su ámbito de competencia. Además, se añade un nuevo apartado 7 para adaptar el contenido de la norma a las previsiones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

**15.-** El apartado tres del artículo único modifica el apartado 1 del artículo 3 del Estatuto, añadiendo las letras l) y m) para incorporar dos nuevas funciones al CEJ: la de elaborar y ejecutar programas de formación y apoyo para la preparación de las pruebas de acceso a los cuerpos y carreras dentro de su ámbito de actuación, y la de poder convocar y conceder becas destinadas a la preparación de las pruebas de acceso dentro de su ámbito de competencias.

**16.-** El apartado cuatro da nueva redacción al artículo 6 del Estatuto, que regula la composición del Consejo Rector, introduciendo como novedad una vocalía correspondiente a un vocal o una vocal del Consejo del Secretariado.

**17.-** El apartado cinco del artículo único modifica el apartado 1 del artículo 10, relativo a las funciones del director, añadiendo una letra o) para incluir como una de las funciones de la dirección del CEJ la de dictar las resoluciones por las que se acuerde la convocatoria y concesión de las becas para la



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Gabinete Técnico

Estudios e informes

preparación de las pruebas de acceso a los cuerpos y carreras dentro de su ámbito de competencia.

**18.-** El apartado seis del artículo único modifica el apartado 2 del artículo 10 para adaptarlo a las previsiones de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en materia de recursos administrativos.

**19.-** El apartado siete del artículo único añade un nuevo artículo 30 bis, que regula lo relativo al contenido, la selección del personal docente y demás previsiones sobre el programa de formación y apoyo a la preparación de las pruebas de acceso a las carreras y cuerpos dentro del ámbito de competencia del Centro de Estudios Jurídicos.

**20.-** El apartado ocho del artículo único modifica el art. 40, relativo al régimen económico-financiero y control de eficacia, para actualizar la normativa vigente en la materia y adaptar su contenido a las previsiones de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

**21.-** El apartado nueve del artículo único modifica el artículo 41, relativo al régimen del personal y de contratación, para actualizar la normativa vigente en la materia y adaptar su contenido a las previsiones de la ley 40/2015.

**22.-** La disposición derogatoria única dispone la derogación del Real Decreto 521/2015, de 19 de junio, por el que se crea la Junta Rectora de Gestión de Medios Administrativos de los organismos autónomos Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Instituto de Estudios Fiscales, Instituto Nacional de Administración Pública y Centro de Estudios Jurídicos.

**23.-** La disposición final única establece la entrada en vigor del Real Decreto el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

### **IV.- CONSIDERACIONES PARTICULARES**

**24.-** En el contenido del proyecto cabe distinguir cuatro partes diferenciadas, que serán objeto de análisis en el presente informe. Por un lado, se incorpora al acervo funcional del Centro de Estudios Jurídicos el fin (art. 2.3 del Estatuto proyectado) y la facultad (art. 3.1.I) del Estatuto proyectado) de elaborar y ejecutar programas de formación y apoyo para la preparación de las pruebas de acceso a las carreras judicial y fiscal, a los cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y Abogados del Estado, así como el resto de cuerpos de la Administración de Justicia incluidos en el ámbito de competencia del Centro de Estudios Jurídicos. El nuevo artículo 30 bis del



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Gabinete Técnico

Estudios e informes

Estatuto regula el contenido de esos programas de formación y apoyo a la preparación de las pruebas de acceso.

**25.-** Por otro lado, se añade a las funciones del Centro de Estudios Jurídicos la de convocar, gestionar y conceder becas para la preparación de pruebas de acceso a las carreras y cuerpos referidos anteriormente (arts. 3.1.m) y 10.1.o) del Estatuto proyectado).

**26.-** En tercer lugar, se da nueva redacción al artículo 6 del Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos, relativo a la composición del Consejo Rector, introduciendo una vocalía correspondiente a un vocal o una vocal del Consejo del Secretariado.

**27.-** Finalmente, el proyecto pretende adaptar el contenido del Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos al régimen propio de los organismos autónomos contenido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Con esta finalidad se introduce una nueva disposición adicional cuarta en el Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, y se dan nueva redacción a los artículos 2.7, 10.2, 40 y 41 del Estatuto.

### ***A) Programas de formación y apoyo para la preparación de las pruebas de acceso a las carreras judicial y fiscal y a otros cuerpos funcionariales***

**28.-** La Ley atribuye al Centro de Estudios Jurídicos la función de «*colaboración con el Ministerio de Justicia en la selección, formación inicial y continuada de los miembros de la Carrera Fiscal, el Cuerpo de Letrados y demás personal al servicio de la Administración de Justicia*» (art. 434.2 LOPJ). Como es sabido el anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, contiene una ampliación de la función del CEJ, al incorporarse un nuevo apartado 3 al artículo 434 LOPJ en el que se establece lo siguiente: «3. Además, al Centro de Estudios Jurídicos le corresponde: a) Como centro de capacitación, la realización de actividades formativas de preparación del proceso selectivo para acceder a la Carrera Judicial o Fiscal, Abogacía del Estado y Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. [...]». De este modo, el anteproyecto (y ahora el proyecto de ley [BOCG, Congreso de los Diputados, serie A, núm. 59-1, de 22 de mayo de 2025]) prevé una nueva configuración del CEJ proyectando su función formativa más allá del ámbito del personal integrado en el Ministerio Fiscal y los cuerpos funcionariales al servicio de la Administración de Justicia, al atribuirle la condición de centro de capacitación para la preparación de las pruebas selectivas a las carreras



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Gabinete Técnico

Estudios e informes

judicial y fiscal y a los cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y Abogados del Estado, entre otros.

**29.-** En la nueva configuración proyectada amplía el ámbito subjetivo de su actividad, que deja de ser interna o dirigida a quienes han sido seleccionados o forman parte ya de los cuerpos funcionariales de referencia, para ser también externa y dirigida a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas interesados en preparar las pruebas de acceso a las carreras y cuerpos indicados. Al Centro de Estudios Jurídicos, en la reforma legal, se le habilita para prestar un servicio de formación dirigido a los ciudadanos en concurrencia con el sector privado. De acuerdo con la exposición de motivos del anteproyecto de ley, esta función como *«centro público y oficial de preparación»* se justifica en la idea de complementariedad (*«complementa la oferta privada»*) y en los principios de calidad, accesibilidad y transparencia (*«aportando a la labor de preparación altos estándares de profesionalidad, medios humanos y tecnológicos, accesibilidad y transparencia»*).

**30.-** Pues bien, la modificación reglamentaria proyectada en virtud de la cual el CEJ podrá desarrollar y ejecutar programas de formación y apoyo a la preparación de pruebas de acceso a las carreras judicial y fiscal y otros cuerpos de funcionarios (arts. 2.3 y 3.1 I) del Estatuto proyectado) carece de la necesaria habilitación legal, hasta en tanto no esté en vigor la reforma del artículo 434 LOPJ actualmente en trámite.

**31.-** En el preámbulo del proyecto de Real Decreto objeto de informe, se afirma que *«se regula expresamente como un objetivo y función, englobado dentro de la función genérica de impartir formación a los profesionales del Derecho, la creación de un programa de apoyo y formación para preparar las pruebas de acceso a los distintos cuerpos y carreras dentro del ámbito de competencia del CEJ»*. Ahora bien, el proyecto parte de una interpretación del vigente artículo 434.2 LOPJ tan amplia que viene a transformar el preciso objeto de la función legalmente prevista en otro distinto de un nivel más elevado de generalidad. En efecto, el artículo 434.2 LOPJ no atribuye al CEJ una *«función genérica de impartir formación a los profesionales del Derecho»* sino, textual y precisamente, *«la colaboración con el Ministerio de Justicia en la selección, formación inicial y continuada de los miembros de la Carrera Fiscal, el Cuerpo de Letrados y demás personal al servicio de la Administración de Justicia»*. No se trata, por tanto, de la formación de cualquier profesional del Derecho, o de cualquier ciudadano o ciudadana con interés en llegar a serlo, sino de la específica formación destinada a los integrantes de concretos cuerpos funcionariales.

**32.-** De acuerdo con lo expuesto, el vigente artículo 434.2 LOPJ no ofrece cobertura legal suficiente a la ampliación funcional del Centro de Estudios



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Gabinete Técnico

Estudios e informes

Jurídicos para que actúe como centro público de formación para la preparación de pruebas de acceso a las carreras judicial y fiscal y otros cuerpos funcionariales, ofreciendo así servicios en el mercado en concurrencia con la oferta privada. De aprobarse el proyecto de ley en tramitación, esa habilitación legal se contendría expresamente en el proyectado artículo 434.3 a) LOPJ.

**33.-** Debe insistirse que, de aprobarse el proyecto de Real Decreto en los términos propuestos, manteniéndose inalterada la letra del artículo 434.2 LOPJ, la futura norma reglamentaria incurrirá en vicio de nulidad (art. 47.2 en relación con el art. 128. 2, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) por ampliar el ámbito competencial del Centro de Estudios Jurídicos e incorporar funciones no habilitadas por la Ley. De este modo, los artículos 2.3, 3.1 I) y 30 bis del Estatuto, en los términos proyectados, incurriría en *ultra vires*, vulnerando la vinculación positiva (*positive Bindung*) a la Ley. Este reparo de legalidad debería llevar a excluir los referidos preceptos del proyecto, si se quisiera aprobar el Real Decreto estando vigente la redacción actual del artículo 434 LOPJ, o bien, a esperar a que entre en vigor la futura modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

**34.-** Más allá de esta consideración sobre la cobertura legal de la nueva función asignada al Centro de Estudios Jurídicos, desde la perspectiva del impacto que la nueva función tiene sobre el ingreso en la Carrera Judicial, debe recordarse lo señalado en el informe de este Consejo General del Poder Judicial, aprobado por el Pleno en su sesión de 19 de marzo de 2025:

«**309.-** La Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces (párrafo 2.3) precisa que *«cualquier autoridad encargada de garantizar la calidad del programa de formación debe ser independiente de los poderes ejecutivo y legislativo y estar compuesto, al menos en un 50%, por magistrados»*. En idéntico sentido, se refleja en el Informe n.º 10/2007 del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE). Tal conclusión, sin duda, debe predicarse igualmente respecto de la preparación de los futuros integrantes del Poder Judicial, puesto que los principios constitucionales esenciales de un Estado de Democrático y de Derecho como el nuestro deberían inspirar la organización y funcionamiento de un centro de preparación para el acceso a la Carrera Judicial con el objetivo primordial de garantizar la independencia y la imparcialidad del juez, que son los que constituyen su legitimidad.

**310.-** La actividad y desarrollo de la preparación de las oposiciones, en la medida que atañe directamente al interés público, se considera más adecuado que estuviera encomendada a una autoridad u órgano plenamente independiente, así como que el poder judicial jugara un papel notable.





## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Gabinete Técnico

Estudios e informes

**311.-** Cabe subrayar que la regulación de la función de preparación por parte del CEJ se realiza de forma absolutamente general y abstracta, por lo que resultaría recomendable que se concretasen, siquiera mínimamente, las líneas generales de actuación, organización, funcionamiento, cualificación profesional de los preparadores, así como requisitos y condiciones de matriculación en tal centro, para facilitar y potenciar el acceso a aquél respecto de aquellos que presentasen los mejores expedientes académicos que permitieran obtener la excelencia para lograr que el principio esencial de igualdad de oportunidades que preside la MAIN sea el eje vertebrador del acceso a la Carrera Judicial y Fiscal.»

**35.-** Estas consideraciones fundadas en el principio de independencia, efectuadas respecto de la opción legislativa por incorporar en el ámbito del poder ejecutivo la preparación de las pruebas de ingreso en la carrera judicial, deben reiterarse de nuevo con ocasión del proyecto de Real Decreto que mantiene este mismo modelo. Conforme a los criterios de *soft law* referenciados en aquel informe y en coherencia con el principio de separación de poderes, la formación de los futuros integrantes del poder judicial debe residenciarse en órganos, organizaciones o personas ajenas a otro poder del Estado como es el ejecutivo.

**36.-** En los países de nuestro entorno, existen mecanismos e instrumentos públicos que facilitan la preparación del acceso a la magistratura y que se ofrecen desde espacios institucionales separados del gobierno, en coherencia con el principio de independencia judicial.

**37.-** En Francia la Escuela Nacional de la Magistratura desarrolla un programa denominado *Prépas Talents* destinado a los estudiantes interesados en preparar las pruebas de acceso a la magistratura y mantiene convenios con algunas universidades para ofrecer másteres de preparación de estas pruebas. En el ámbito universitario se ofrecen también distintas actividades académicas. En Italia existen prácticas formativas («*tirocini formativi*», reguladas en el art. 73 del Decreto-legge 21 de junio de 2013, n. 69) dirigidas a licenciados en Derecho con un rendimiento académico alto y que se desarrollan en el ámbito de los tribunales bajo la tutela de magistrados. También existen en distintas universidades *Scuole di specializzazione per le professioni legali* que ofrecen formación específica para el acceso a distintas profesiones jurídicas.

**38.-** Tanto la opción del proyecto de ley, como ahora la del proyecto reglamentario, es situar al Centro de Estudios Jurídicos como centro de capacitación para la preparación de las pruebas de acceso a los señalados cuerpos funcionariales. Debe subrayarse que esta atribución contenida en el artículo 3.1.I) del Estatuto proyectado se contiene en el precepto rubricado «*Funciones y facultades*» en el que se enumeran las correspondientes al CEJ



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Gabinete Técnico

Estudios e informes

y que se enmarcan con la siguiente cláusula de atribución: *«En los términos previstos en la legislación vigente, corresponde al Centro de Estudios Jurídicos, en colaboración con el Ministerio de Justicia y, en su caso, la Fiscalía General del Estado».*

**39.-** En el proyecto se aprecia una total ausencia de previsión de participación del órgano de gobierno del Poder Judicial, por lo que es imperativo que en la elaboración y ejecución de programas de formación y apoyo para la preparación de las pruebas de acceso en lo que a las carreras judicial y fiscal se refiere se prevea expresamente la colaboración del Consejo General del Poder Judicial. Siendo las pruebas de acceso comunes para ambas carreras por la categoría de juez o abogado-fiscal, carece de sentido que en la elaboración y ejecución de estos programas deba colaborar la Fiscalía General del Estado, pero no el Consejo General del Poder Judicial. De los términos como se configura la referencia a estos programas no queda excluida la posibilidad de que puedan abarcar, también, el acceso a la carrera judicial por la categoría de magistrado, lo que redundaría en la irrazonabilidad de la no previsión de la participación del Consejo en esta materia.

**40.-** En consecuencia, la elaboración del programa de formación en lo relativo al acceso a la carrera judicial debe configurarse como una actuación que debe realizarse en régimen de cooperación específica con el Consejo General del Poder Judicial. Por ello, debería introducirse tanto en el artículo 3.1.m) como en el artículo 30 bis.1 del Estatuto proyectado una mención específica de que en la elaboración del programa de formación relativo a la formación para la preparación de las pruebas de acceso a la carrera judicial (y fiscal) se deberá contar, obligatoriamente, con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial.

**41.-** Esta específica colaboración entre el Centro de Estudios Jurídicos y el Consejo General del Poder Judicial debe articularse a través de concretos mecanismos de participación en el diseño y gestión del programa de formación para la preparación de las pruebas de acceso a la Carrera Judicial. Esta participación del órgano de gobierno del Poder Judicial debe ser significativa y determinante y en pie de igualdad, por lo que no cabría acudir a la vía de que en la elaboración de este tipo de programas se diera participación al Consejo Rector del Centro de Estudios Jurídicos, en el que el Consejo General del Poder Judicial tiene una posición diluida, al contar con una de las ocho vocalías que se prevén en el artículo 6 del Estatuto en la redacción proyectada.

**42.-** El artículo 30 bis del Estatuto modificado contiene la regulación del programa de formación y apoyo a la preparación a las pruebas de acceso. Este precepto se ubica sistemáticamente en la Sección 2ª rubricada *«De la*



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Gabinete Técnico

Estudios e informes

*formación continuada» dentro del Capítulo IV dedicado al «Acceso y cursos de formación del Centro de Estudios Jurídicos». La singularidad de los programas de preparación de pruebas de acceso aconseja que la regulación de estos, contenida en el artículo 30 bis, se sitúe bajo una sección distinta (bien la primera o la tercera), dentro del Capítulo IV, bajo una rúbrica que haga referencia a la formación para pruebas de acceso a las carreras judicial y fiscal, a los cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y Abogados del Estado, y resto de cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.*

**43.-** En el apartado 1 se determina que los contenidos específicos de ese programa se contendrán en un plan anual de formación. En ese plan se establecerán *«los objetivos, destinatarios, metodología, duración inicial y máxima de la formación individual, y sistemas de evaluación»*. El plan anual constituye así el instrumento clave en la configuración de los programas de formación.

**44.-** Al respecto cabe realizar las siguientes consideraciones. No se determina el órgano al que corresponde la aprobación del plan anual. Tampoco se determinan los mecanismos de colaboración con otras instituciones en su concreto diseño y elaboración. Esta omisión, como se ha señalado, es especialmente relevante por lo que afecta al Consejo General del Poder Judicial, cuya participación debe estar expresamente contemplada.

**45.-** En cuanto al concreto contenido de los programas, el proyecto reglamentario defiende al plan la determinación de todos sus elementos, sin prefigurar normativamente ninguno de ellos. Esta escasa densidad normativa en la configuración de estos programas de formación debería corregirse, señalando la norma reglamentaria algunos parámetros que deban guiar la elaboración del plan anual. En particular, resulta llamativa la total ausencia de previsión respecto de la financiación de este tipo de actividad formativa. Nada se dice sobre si se configurará con carácter gratuito para sus destinatarios (como es el caso de la formación inicial y continuada dirigida a miembros de los cuerpos funcionariales en el ámbito de competencia del CEJ como correlato de su derecho estatutario a la formación) o si está sujeta a precio público que satisfarán quienes participen en estos programas formativos; aunque implícitamente cabe entender que los usuarios habrán de realizar una contraprestación, al preverse la posibilidad, como se señalará más adelante, de que se concedan becas mixtas, que incluyan tanto una dotación dineraria como una prestación en especie consistente en un servicio de preparación de estas pruebas de acceso. Si bien el artículo 26.1.a) de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, determina que el establecimiento de los precios públicos se realizará *«por Orden del Departamento ministerial del que dependa el órgano que ha de percibirlos y*



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Gabinete Técnico

Estudios e informes

a *propuesta de éste*», el Estatuto del CEJ debería prever, para el caso de que los programas de formación estén sujetos a contraprestación, que la fijación del precio público por la prestación del programa de formación para la preparación de las pruebas de acceso se establecerá por Orden del Ministerio al que está adscrito del CEJ.

**46.-** En consecuencia, el proyecto debería establecer requisitos normativos mínimos para los planes anuales de formación, incluyendo criterios de calidad, selección, financiación y transparencia.

**47.-** El apartado 2 del artículo 30 bis regula la selección del personal docente que participe en el programa de formación y apoyo a la preparación de las pruebas de acceso. Todos los elementos relevantes de la selección se defieren a la convocatoria, salvo dos, que se preordenan reglamentariamente: (i) en la selección se observarán los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad; y (ii) se garantizará la selección de miembros de las carreras o cuerpos a cuyo ingreso se preparan, esto es, deberá seleccionarse como personal docente a miembros de las correspondientes carreras o cuerpos cuyas pruebas de acceso son objeto de preparación.

**48.-** De acuerdo con el referido artículo 30 bis.2 del Estatuto proyectado, la convocatoria y la selección del personal docente corresponde a la dirección del CEJ. En este aspecto, conviene subrayar de nuevo la necesidad de prever la participación del Consejo General del Poder Judicial (y de la Fiscalía General del Estado) en lo relativo a la convocatoria y selección de personal docente entre miembros de la Carrera Judicial (y Fiscal). Las razones expuestas más arriba a favor de un modelo de preparación de las pruebas de acceso respetuoso con el principio de independencia judicial abogan por que tanto en la configuración de la convocatoria como en la selección se contemple expresamente la colaboración del órgano de gobierno del Poder Judicial en los términos señalados más arriba.

### ***B) Convocatoria y concesión de becas para la preparación de pruebas de acceso***

**49.-** El artículo 3.1.m) del Estatuto proyectado atribuye al CEJ «*La convocatoria y concesión de becas en régimen de concurrencia competitiva para la preparación de las pruebas de acceso a las carreras judicial y fiscal, a los cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y Abogados del Estado, así como al resto de cuerpos incluidos en el ámbito de competencia del Centro de Estudios Jurídicos*». Por su parte, el artículo 10.1.o) del Estatuto, en la redacción dada por el proyecto reglamentario, confiere a la Dirección del CEJ la competencia para «*dictar las resoluciones por las que se acuerden la convocatoria y concesión de becas para la preparación de las*



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Gabinete Técnico

Estudios e informes

*pruebas de acceso a las carreras judicial y fiscal, a los cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y Abogados del Estado, así como al resto de cuerpos dentro del ámbito de competencia del Centro de Estudios Jurídicos. Cuando las becas comprendan como ayuda en especie la prestación de un servicio de preparación de esas pruebas, la dirección del Centro de Estudios Jurídicos podrá realizar los actos y celebrar los negocios jurídicos necesarios para la selección y gestión de esos servicios en el marco de la ayuda concedida.»*

**50.-** El proyecto incorpora expresamente la función que ya venía desempeñando el CEJ de convocatoria, gestión y concesión de becas para la preparación de oposiciones. Al amparo de lo previsto en la Ley 8/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, desde el 2022 se han acordado convocatorias para la concesión de ayudas económicas para la preparación de oposiciones para el ingreso en las carreras judicial y fiscal, en el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y en el Cuerpo de Abogados del Estado. Las bases reguladoras de las convocatorias se contienen en la Orden PJC/491/2024, de 23 de mayo, modificada por la Orden PJC/413/2025, de 30 de abril.

**51.-** En relación con la previsión de estas becas contenida en el anteproyecto de ley objeto del informe de 19 de marzo de 2025 de este Consejo, se puso de manifiesto que *«la concesión de becas ha de tener una acogida favorable al facilitar la igualdad entre los opositores, con independencia de su situación económica, ya que durante el transcurso de tiempo de preparación de la oposición-, una media de cuatro años-, todos los costes tanto personales como de preparación son asumidos, en la mayoría de los casos, por las propias familias de los opositores, en la medida en que la preparación es tan exigente que resulta difícil compaginarla con algún trabajo a tiempo completo, evitando, por tanto, la concesión de las becas la desigualdad entre aquellas familias que pueden asumir el coste de aquellas que no.»*

**52.-** Las previsiones que se contienen en el proyecto vienen a dar acomodo en el Estatuto del CEJ a funciones que venía ya desempeñando en el marco de las distintas convocatorias de becas, por lo que en este punto no representan una novedad.

**53.-** En cuanto a las becas consistente en ayudas en especie, debe señalarse que se incorporaron a las bases de la convocatoria de este tipo de becas en virtud de la modificación introducida por la Orden PJC/413/2025, de 30 de abril. En esta Orden se exponía en relación con esta novedad lo siguiente: *«Las ayudas en especie que se introducen con la presente modificación son el instrumento adecuado y proporcionado para conseguir la anterior finalidad, puesto que posibilita que a los beneficiarios de las mismas se les preste este*



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Gabinete Técnico

Estudios e informes

*servicio de preparación de manera directa, por el Centro de Estudios Jurídicos O.A. quien llevará a cabo una selección del personal docente mediante una convocatoria en la que se observen los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, garantizando la selección de miembros de las carreras o cuerpos a cuyo ingreso se oposita, su vinculación con el servicio activo, el carácter compatible, complementario y accesorio de esta actividad docente con aquél, y el trato individualizado al opositor, removiendo así el obstáculo que pudiera derivarse de las dificultades en la búsqueda de esta figura.»*

**54.-** En la Orden citada la prestación del servicio de preparación se realizaba directamente por el CEJ, a través de la selección del personal docente correspondiente. En cambio, en la redacción proyectada del artículo 10.1.o) del Estatuto se afirma que cuando las becas comprendan como ayuda en especie la prestación de un servicio de preparación de las pruebas de acceso, *«la dirección del Centro de Estudios Jurídicos podrá realizar los actos y celebrar los negocios jurídicos necesarios para la selección y gestión de esos servicios en el marco de la ayuda concedida»*. La letra del precepto contiene cierto grado de indeterminación sobre qué tipo de actos y negocios jurídicos podrá realizar la dirección del CEJ para seleccionar y gestionar esos servicios de preparación. Previéndose programas de preparación a cargo del CEJ (art. 30 bis), parece lo razonable vincular expresamente estas ayudas en especie a la participación en estos programas públicos reglados de formación y apoyo a la preparación de las pruebas de acceso.

### **C) Composición del Consejo Rector**

**55.-** Se da nueva redacción al artículo 6 del Estatuto, relativo a la composición del Consejo Rector, en la que como novedad se incorpora como Vocal del Consejo a uno o una vocal del Consejo del Secretariado.

**56.-** El Consejo del Secretariado, regulado en los artículos 22 y siguientes del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, aprobado por Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, se configura como órgano representativo del colectivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales con funciones consultivas en las materias que afectan al Cuerpo. El listado de funciones contenido en el artículo 23 del Reglamento Orgánico se cierra con una cláusula abierta conforme a la cual corresponde al Consejo del Secretariado *«las demás atribuciones que este Reglamento, la ley u otras disposiciones le confieran»* (art. 23. j) Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios judiciales).

**57.-** La previsión de incorporación de un o una vocal del Consejo del Secretario en el Consejo Rector del Centro de Estudios Jurídicos resulta plenamente razonable atendidas, por un lado, la función de formación



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Gabinete Técnico

Estudios e informes

desarrollada por el CEJ respecto de los Letrados de la Administración de Justicia, y, por otro lado, el carácter del Consejo del Secretariado como *«instrumento de participación democrática del colectivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales»* (art. 22.1 Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios judiciales).

### ***D) Adaptación a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público***

**58.-** La disposición adicional cuarta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, dispone que los organismos y entidades del sector público institucional a los que se refiere el artículo 84.1 de esa Ley, existentes a la entrada en vigor de la misma, deberán adaptarse a su contenido antes del 1 de octubre de 2024.

**59.-** La regulación del Centro de Estudios Jurídicos contenida en el Real Decreto 312/2019 que derogó el anterior Estatuto contenido en el Real Decreto 1276/2003, de 10 de octubre, adaptó la regulación del organismo autónomo a la Ley 40/2015. Ahora, el proyecto objeto de informe se propone completar esa adecuación al marco de la referida Ley.

**60.-** Se incorpora al Real Decreto 312/2019 una nueva disposición adicional cuarta referida al cambio de denominación del Consejo del Centro de Estudios Jurídicos. Se produce un cambio de denominación del referido Consejo que pasa a denominarse *«Consejo Rector»*. El cambio pretende adaptar la designación del órgano colegiado de gobierno a la terminología empleada por el artículo 90 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que establece como máximos órganos de gobierno de los organismos autónomos al Presidente y el Consejo Rector. Mientras que el artículo 5.1 del Estatuto, aprobado por el Real Decreto 312/2019, sí se refiere al Presidente del CEJ, se hace mención en él al *«Consejo»* como segundo órgano de gobierno. La modificación proyectada asegura el tratamiento homogéneo de ambos órganos de gobierno desde el punto de vista terminológico.

**61.-** Se introduce un nuevo apartado 7 en el artículo 2 del Estatuto en el que expresamente se establece que *«la actuación del Centro de Estudios Jurídicos se somete a los principios de actuación del artículo 81 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre»*. En coherencia con esta incorporación, la rúbrica del artículo 2 pasa a ser *«Fines y principios de actuación»*.

**62.-** Se da nueva redacción al artículo 10.2 del Estatuto, disponiendo ahora que *«Ponen fin a la vía administrativa todos los actos, acuerdos y resoluciones de la Dirección del Centro de Estudios Jurídicos, O.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas»*. Se elimina de este



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Gabinete Técnico

Estudios e informes

modo el recurso de alzada ante el titular del Ministerio de Justicia que se contempla en la redacción vigente del precepto.

**63.-** La regulación proyectada se acomoda a lo previsto en el artículo 93.1.b de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que establece que los estatutos de los organismos autónomos deberán especificar aquellos de sus actos y resoluciones que agotan la vía administrativa. Y está en línea con lo establecido en el artículo 114.2.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que dispone que agotan la vía administrativa, en el ámbito estatal, *«En los Organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa»*. La eliminación del recurso de alzada ante el titular del Ministerio de Justicia refuerza la autonomía funcional de la dirección del CEJ, lo cual se valora positivamente.

**64.-** Se da nueva redacción al artículo 40, relativo al régimen económico-financiero y control de eficacia, introduciendo un nuevo apartado 3 conforme al cual *«El organismo estará sometido al control de eficacia, que será ejercicio por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a través de la Inspección de los Servicios de dicho ministerio. Asimismo, el organismo estará sometido a la supervisión continua del Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 85.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre»*.

**65.-** La nueva redacción se ajusta a lo previsto en el artículo 85.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que dispone que el control de eficacia será ejercicio por el departamento al que estén adscritos.

**66.-** Se da nueva redacción al artículo 41, relativo al régimen del personal y de contratación, que no introduce novedades sustantivas, sino que, por un lado, el apartado 1 hace una referencia más genérica a la normativa aplicable en materia de personal (*«normativa sobre función pública y legislación laboral aplicables al resto del personal de la Administración General del Estado»*), en lugar de citar, como ahora, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Por otro lado, en el apartado 2, se sustituye la referencia al *«régimen de contratación»* por la más precisa del *«régimen jurídico aplicable para la contratación de bienes y servicios»*.

**67.-** Por último, la disposición derogatoria única establece la derogación del Real Decreto 521/2015, de 19 de junio, por el que se crea la Junta Rectora de Gestión de Medios Administrativos de los organismos autónomos Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Instituto de Estudios Fiscales,





## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Gabinete Técnico

Estudios e informes

Instituto Nacional de Administración Pública y Centro de Estudios Jurídicos. Esta Junta tiene como misión definir los criterios para que se efectúe una gestión compartida y cooperativa de recursos y servicios entre los organismos representados en ella para mejorar su eficacia, eficiencia y calidad a través de la promoción, aprobación, despliegue y evaluación de planes, proyectos y actividades comunes. Ni el preámbulo del proyecto ni la MAIN dan cuenta de la razón de esta derogación.

### V. CONCLUSIONES

**PRIMERA.-** El proyecto consta de un cuádruple contenido. Por un lado, se incorpora al acervo funcional del Centro de Estudios Jurídicos el fin (art. 2.3 del Estatuto proyectado) y la facultad (art. 3.1.l) del Estatuto proyectado) de elaborar y ejecutar programas de formación y apoyo para la preparación de las pruebas de acceso a las carreras judicial y fiscal, a los cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y Abogados del Estado, así como el resto de cuerpos de la Administración de Justicia incluidos en el ámbito de competencia del Centro de Estudios Jurídicos. El nuevo artículo 30 bis del Estatuto regula el contenido de esos programas de formación y apoyo a la preparación de las pruebas de acceso. Por otro lado, se añade a las funciones del Centro de Estudios Jurídicos la de convocar, gestionar y conceder becas para la preparación de pruebas de acceso a las carreras y cuerpos referidos anteriormente (arts. 3.1.m) y 10.1.o) del Estatuto proyectado). En tercer lugar, se da nueva redacción al artículo 6 del Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos, relativo a la composición del Consejo Rector, introduciendo una vocalía correspondiente a un vocal o una vocal del Consejo del Secretariado. Finalmente, el proyecto pretende adaptar el contenido del Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos al régimen propio de los organismos autónomos contenido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Con esta finalidad se introduce una nueva disposición adicional cuarta en el Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, y se dan nueva redacción a los artículos 2.7, 10.2, 40 y 41 del Estatuto.

**SEGUNDA.-** La modificación reglamentaria proyectada en virtud de la cual el Centro de Estudios Jurídicos podrá desarrollar y ejecutar programas de formación y apoyo a la preparación de pruebas de acceso a las carreras judicial y fiscal y otros cuerpos de funcionarios (arts. 2.3 y 3.1.l) del Estatuto proyectado) carece de la necesaria habilitación legal, hasta en tanto no esté en vigor la reforma del artículo 434 LOPJ actualmente en trámite. En el preámbulo del proyecto de Real Decreto objeto de informe, se afirma que *«se regula expresamente como un objetivo y función, englobado dentro de la función genérica de impartir formación a los profesionales del Derecho, la creación de un programa de apoyo y formación para preparar las pruebas de acceso a los distintos cuerpos y carreras dentro del ámbito de competencia*



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Gabinete Técnico

Estudios e informes

del CEJ». Ahora bien, el proyecto parte de una interpretación del vigente artículo 434.2 LOPJ tan amplia que viene a transformar el preciso objeto de la función legalmente prevista en otro distinto de un nivel más elevado de generalidad. En efecto, el artículo 434.2 LOPJ no atribuye al CEJ una *«función genérica de impartir formación a los profesionales del Derecho»* sino, textual y precisamente, *«la colaboración con el Ministerio de Justicia en la selección, formación inicial y continuada de los miembros de la Carrera Fiscal, el Cuerpo de Letrados y demás personal al servicio de la Administración de Justicia»*.

**TERCERA.-** De aprobarse el proyecto de Real Decreto en los términos propuestos, manteniéndose inalterada la letra del artículo 434.2 LOPJ, la futura norma reglamentaria incurrirá en vicio de nulidad (art. 47.2 en relación con el art. 128. 2, ambos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) por ampliar el ámbito competencial del Centro de Estudios Jurídicos e incorporar funciones no habilitadas por la Ley. Este reparo de legalidad debería llevar a excluir los artículos 2.3, 3.1 I) y 30 bis del proyecto, si se quisiera aprobar el Real Decreto estando vigente la redacción actual del artículo 434 LOPJ, o bien, a esperar a que entre en vigor la futura modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial

**CUARTA.-** Tanto la opción del proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como ahora la del proyecto reglamentario, es situar al Centro de Estudios Jurídicos como centro de capacitación para la preparación de las pruebas de acceso a los señalados cuerpos funcionariales. Debe subrayarse que esta atribución contenida en el artículo 3.1.I) del Estatuto proyectado se contiene en el precepto rubricado *«Funciones y facultades»* en el que se enumeran las correspondientes al CEJ y que se enmarcan con la siguiente cláusula de atribución: *«En los términos previstos en la legislación vigente, corresponde al Centro de Estudios Jurídicos, en colaboración con el Ministerio de Justicia y, en su caso, la Fiscalía General del Estado»*. A la vista de la total ausencia de previsión de participación del órgano de gobierno del Poder Judicial, es imperativo que en la elaboración y ejecución de programas de formación y apoyo para la preparación de las pruebas de acceso en lo que a las carreras judicial y fiscal se refiere se prevea expresamente la colaboración del Consejo General del Poder Judicial. Siendo las pruebas de acceso comunes para ambas carreras por la categoría de juez o abogado-fiscal, carece de sentido que en la elaboración y ejecución de estos programas deba colaborar la Fiscalía General del Estado, pero no el Consejo General del Poder Judicial. De los términos como se configura la referencia a estos programas no queda excluida la posibilidad de que puedan abarcar, también, el acceso a la carrera judicial por la categoría de magistrado, lo que redundaría en la irrazonabilidad de la no previsión de la participación del Consejo en esta materia. En consecuencia, la elaboración del programa de formación en lo relativo al acceso a la carrera judicial debe configurarse como una



## **CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL**

Gabinete Técnico

Estudios e informes

actuación que debe realizarse en régimen de cooperación específica con el Consejo General del Poder Judicial. Por ello, debería introducirse tanto en el artículo 3.1.m) como en el artículo 30 bis.1 del Estatuto proyectado una mención específica de que en la elaboración del programa de formación relativo a la formación para la preparación de las pruebas de acceso a la carrera judicial (y fiscal) se deberá contar, obligatoriamente, con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial.

**QUINTA.-** Esta específica colaboración entre el Centro de Estudios Jurídicos y el Consejo General del Poder Judicial debe articularse a través de concretos mecanismos de participación en el diseño y gestión del programa de formación para la preparación de las pruebas de acceso a la Carrera Judicial. Esta participación del órgano de gobierno del Poder Judicial debe ser significativa y determinante y en pie de igualdad, por lo que no cabría acudir a la vía de que en la elaboración de este tipo de programas se diera participación al Consejo Rector del Centro de Estudios Jurídicos, en el que el Consejo General del Poder Judicial tiene una posición diluida, al contar con una de las ocho vocalías que se prevén en el artículo 6 del Estatuto en la redacción proyectada

**SEXTA.-** El artículo 30 bis debería situarse sistemáticamente en una sección propia dentro del Capítulo IV del Estatuto proyectado. En este precepto se remite la concreta configuración de los programas de formación para pruebas de acceso a las carreras judicial y fiscal y demás cuerpos funcionariales al plan anual. Al respecto cabe señalar, que no se determina el órgano al que corresponde la aprobación del plan anual. Tampoco se determinan los mecanismos de colaboración con otras instituciones en su concreto diseño y elaboración. Esta omisión, como se ha señalado, es especialmente relevante por lo que afecta al Consejo General del Poder Judicial, cuya participación debe estar expresamente contemplada. En cuanto al concreto contenido de los programas, el proyecto reglamentario defiere al plan la determinación de todos sus elementos, sin prefigurar normativamente ninguno de ellos. Esta escasa densidad normativa en la configuración de estos programas de formación debería corregirse, señalando la norma reglamentaria algunos parámetros que deban guiar la elaboración del plan anual. En particular, resulta llamativa la total ausencia de previsión respecto de la financiación de este tipo de actividad formativa. El proyecto debería establecer requisitos normativos mínimos para los planes anuales de formación, incluyendo criterios de calidad, selección, financiación y transparencia

**SÉPTIMA.-** El apartado 2 del artículo 30 bis regula la selección del personal docente que participe en el programa de formación y apoyo a la preparación de las pruebas de acceso. Todos los elementos relevantes de la selección se defieren a la convocatoria, salvo dos, que se preordenan reglamentariamente: (i) en la selección se observarán los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad; y (ii) garantizará la selección de



## CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Gabinete Técnico

Estudios e informes

miembros de las carreras o cuerpos a cuyo ingreso se preparan, esto es, deberá seleccionarse como personal docente a miembros de las correspondientes carreras o cuerpos cuyas pruebas de acceso son objeto de preparación. La convocatoria y la selección del personal docente corresponde a la dirección del CEJ. En este aspecto, conviene subrayar de nuevo la necesidad de prever la participación del Consejo General del Poder Judicial (y de la Fiscalía General del Estado) en lo relativo a la convocatoria y selección de personal docente entre miembros de la Carrera Judicial (y Fiscal). Las razones expuestas más arriba a favor de un modelo de preparación de las pruebas de acceso respetuoso con el principio de independencia judicial, abogan por que tanto en la configuración de la convocatoria como en la selección se contemple expresamente la colaboración del órgano de gobierno del Poder Judicial en los términos señalados en el cuerpo del informe.

**OCTAVA.-** El proyecto incorpora expresamente la función que ya venía desempeñando el CEJ de convocatoria, gestión y concesión de becas para la preparación de oposiciones. En cuanto a las becas consistente en ayudas en especie, cabe señalarse que en la redacción proyectada del artículo 10.i.o) del Estatuto se afirma que cuando las becas comprendan como ayuda en especie la prestación de un servicio de preparación de las pruebas de acceso, *«la dirección del Centro de Estudios Jurídicos podrá realizar los actos y celebrar los negocios jurídicos necesarios para la selección y gestión de esos servicios en el marco de la ayuda concedida»*. La letra del precepto contiene cierto grado de indeterminación sobre qué tipo de actos y negocios jurídicos podrá realizar la dirección del CEJ para seleccionar y gestionar esos servicios de preparación. Previéndose programas de preparación a cargo del CEJ (art. 30 bis) parece lo razonable vincular expresamente estas ayudas en especie a la participación en estos programas de formación y apoyo a la preparación de las pruebas de acceso.

**NOVENA.-** La previsión de incorporación de un o una vocal del Consejo del Secretario en el Consejo Rector del Centro de Estudios Jurídicos resulta plenamente razonable atendidas, por un lado, la función de formación desarrollada por el CEJ respecto de los Letrados de la Administración de Justicia, y, por otro lado, el carácter del Consejo del Secretariado como *«instrumento de participación democrática del colectivo del Cuerpo de Secretarios Judiciales»* (art. 22.1 Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios judiciales).

Es cuanto tiene que informar el Consejo General del Poder Judicial.